- f) **Proponer el proyecto de su estatuto orgánico al Consejo Superior de Educación, para su conocimiento y resolución.**
- g) **Celebrar convenios con las universidades nacionales para la formación de los recursos humanos, la investigación y la acción social, y el otorgamiento de los títulos correspondientes por parte de ellas.**

Artículo 11.—Autorízase al colegio Universitario del Caribe Norte para celebrar convenios con cualquier universidad pública dentro del marco jurídico generado por el Convenio de Articulación y Cooperación de la Educación Superior Estatal de Costa Rica.

Asimismo, se le autoriza para celebrar convenios con universidades nacionales e internacionales, con el objeto de promover la cooperación con instituciones públicas y privadas, a fin de que pueda cumplir los fines establecidos en esta ley.

Artículo 12.—El Instituto Costarricense de Turismo podrá aportar los recursos necesarios para financiar la carrera de turismo.

Artículo 13.—Rige a partir de su publicación.

María Elena Núñez Chaves, Diputada.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales.

San José, 18 de junio del 2002.—1 vez.—C-41870.—(48008).

N° 14.784

REFORMA DEL ARTÍCULO 184 DEL CÓDIGO PENAL

Asamblea Legislativa:

Recientemente, el tema de la protección a la niñez, ha suscitado un debate acalorado; esto a razón de que han sido varios los hechos que han provocado la necesidad de crear normas y acciones de gobierno que protejan este sector de la población.

La desaparición del niño Oswaldo Madrigal, de tan solo tres años; hecho alrededor del cual maduró la idea sobre la existencia de grupos organizados para cometer estos crímenes, provocó que no solo la población en general, sino las autoridades del Organismo de Investigación solicitarán endurecer las penas contra este tipo de actos.

En este sentido, se plantea la reforma del artículo 184 del Código Penal, la cual, por la vía de la pena, pretende reducir la constante presencia del dolor y la zozobra en los hogares víctimas de la sustracción de uno de sus menores.

En nuestro país, se demanda también la formación de un frente común, mediante el cual, se generen todas las políticas públicas tendientes a crear un ambiente de protección integral para la niñez.

Por otro lado, ha sido de suma importancia, el que se le diera rango de Ministerio al Patronato Nacional de la Infancia; también, el que desde el Ministerio de Educación se anuncie mano fuerte en contra de aquellos educadores que abusen sexualmente de los niños.

Otros flagelos también golpean a nuestra niñez. Estos males, como la prostitución deben ser combatidos con la fuerza de la ley y con la generación de políticas públicas eficientes desde el Estado.

Nuestro país debe prepararse para combatir, el turismo sexual, el tráfico de órganos, el abuso sexual, el secuestro y toda clase de delitos que se cometen en contra de los más débiles de nuestra sociedad: los niños.

Una pena más fuerte para aquellos que sean juzgados por la sustracción de menores, acompañada de la posibilidad de escuchas telefónicas por tráfico de personas, contribuirá a reducir la incidencia de este mal.

Es importante aclarar, que la presente reforma no afecta la reforma que se dio al artículo 69 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, de 2 de mayo de 1996; puesto que se dirige solamente sobre el aspecto de aumento a la pena por sustracción.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a consideración de los señores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 184 DEL CÓDIGO PENAL

Artículo único.—Reformase el artículo 184 del Código Penal cuyo texto dirá:

“Artículo 184.—Será reprimido, con prisión de seis meses a cuatro años, quien sustraiga a un menor de doce años o a una persona sin capacidad volitiva o cognoscitiva, del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas o el que lo retenga contra la voluntad de estos; pero si ha prestado consentimiento y es mayor de doce años rebajará la pena prudencialmente. Igual pena tendrá quien sirva de intermediario para que un menor de edad salga de la patria potestad de sus padres sin llenar los requisitos de ley. La pena se aumentará en un tercio cuando la intervención se haga con ánimo de lucro”.

Rige a partir de su publicación.

Rocío Ulloa Solano, Laura Chinchilla Miranda, Juan José Vargas Fallas, Diputados.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

San José, 18 de junio del 2002.—1 vez.—C-16220.—(48009).

N° 14.785

ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO IV, DENOMINADO DEL RECURSO DE HÁBEAS DATA, AL TÍTULO III DE LA LEY DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, LEY N° 7135, DE 11 DE OCTUBRE DE 1989

Asamblea Legislativa:

Si bien es cierto, nuestra Constitución Política y diversos tratados internacionales de protección de derechos humanos ratificados por nuestro país, contemplan la protección de los derechos y libertades fundamentales, se carece, muchas veces, de mecanismos ágiles y eficientes que se orienten a su protección. Uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la intimidad, el cual, si bien es cierto que está garantizado por el artículo 24 de nuestra Constitución, los acontecimientos recientes en nuestro país demuestran la vulnerabilidad a que estamos expuestos todos los costarricenses.

En ese sentido, se considera de fundamental importancia establecer los mecanismos e instrumentos necesarios que vengán a garantizar la protección del derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones que tutela nuestra Constitución Política. El Dr. Constantino Urcuyo Fournier, ex diputado de la Asamblea Legislativa en el periodo 1994-1998, presentó un proyecto de ley para establecer la figura del “Recurso de Habeas Data” titulado, “**Adición de un nuevo capítulo IV, denominado “del Recurso de Habeas Data”, al título III de la Ley de Jurisdicción Constitucional, Ley N° 7135, de 19 de octubre de 1989”**.”

Dicho proyecto fue analizado por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos la cual realizó las siguientes consultas: Corte Suprema de Justicia; Sala Constitucional; Colegio de Abogados de Costa Rica; Defensoría de los Habitantes; Caja Costarricense de Seguro Social; tarjetas de crédito MasterCard; tarjeta de crédito ST; tarjeta de crédito Visa; tarjeta de crédito American Express; tarjeta de crédito Visa Banex; tarjeta de crédito Visa Banco Nacional; Instituto Nacional de Seguros.

Asimismo, esta Comisión recibió en audiencia al Dr. Rodolfo Piza y al Dr. Carlos Arguedas, ambos magistrados de la Sala Constitucional y, a representantes de la Asociación Bancaria Costarricense, los cuales hicieron importantes aportes que fueron incorporados al texto.

Después del análisis de las comparecencias y las consultas realizadas a las diversas instituciones, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos rindió un Dictamen Afirmativo de Mayoría. Posteriormente, fue delegado a la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda donde se le dio primer debate. No obstante, después de ser remitido a la Sala Constitucional y hacer esta algunas observaciones sobre el proyecto, el mismo fue enviado al archivo.

Tal y como se reconoció en su momento, la iniciativa del ex diputado Urcuyo Fournier era una propuesta integral y coherente que venía a llenar un vacío existente en nuestra legislación y atender un problema que se ha acrecentado en los últimos años. Para algunos de los constitucionalistas más destacados de nuestro país la aprobación por parte de este Parlamento de una legislación que se oriente a proteger la intimidad de las personas como derecho fundamental, es algo necesario y urgente.

En los últimos días, nuestro país ha visto con asombro las investigaciones que demuestran cómo se maneja y comercia información confidencial por parte de empresas, sin que exista una legislación que regule tan grave violación a un derecho fundamental de las personas como lo es el derecho a la intimidad.

Por este motivo queremos retomar y proponer como base de discusión el dictamen, de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, del proyecto planteado por el ex diputado Urcuyo Fournier, pues el mismo nos permite un gran avance, dado que fue objeto de un profundo estudio y análisis, enriquecido con consultas y audiencias que permitieron la elaboración de un documento sumamente valioso.

Además, este proyecto presenta en su exposición de motivos, un análisis profundo y detallado sobre los alcances y ventajas de contar en nuestra legislación con la figura del Recurso del Habeas Data, así como, de un valioso análisis comparado que nos permite conocer como esta figura ha operado en otros países.

En una democracia como la nuestra, con una larga tradición de respeto a los derechos humanos y a los demás derechos y libertades fundamentales, consagrados por la Constitución Política, los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico en general, son de vital importancia los instrumentos concretos de protección para la defensa de todos los ciudadanos frente a posibles arbitrariedades de individuos o instituciones, ya sean estatales o privados. Son muchos los derechos y libertades que enumera nuestra Constitución, pero no así los mecanismos reales con los que aquellos se pueden proteger efectivamente. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el periodo anterior a la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en 1989, cuando la justicia constitucional en Costa Rica era casi inaccesible.

En su artículo 48, la Constitución Política es clara en garantizar que “**Toda persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución...**” Pero, ¿qué tan accesibles eran estos recursos antes de 1989? En 1988 se plantearon menos de 50 recursos de amparo; para 1995, con la nueva ley se plantearon más de 5.000 recursos.

Dentro de la doctrina del derecho constitucional, se establece una serie de derechos y libertades básicas para todos los ciudadanos. Estos derechos y libertades deben estar garantizados por todos los ordenamientos jurídicos. Entre los principales podemos citar: el derecho a

la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad religiosa e ideológica, el derecho a la libre circulación y otros. Dentro de la esfera de la vida privada, son internacionalmente reconocidos el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al honor, el derecho a la imagen propia y el derecho al secreto de las comunicaciones. Estos últimos, los cuales son inalienables, configuran el círculo más puro de la persona: su **fuerza íntima**.

Muchas son las normas, tanto nacionales como internacionales, que protegen las principales esferas de este tan preciado derecho a la **privacidad**. Algunas de las principales son:

Normas constitucionales:

- El artículo 24 garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
- El artículo 28 dice que todas las acciones privadas que no dañan la moral, o el orden público o que no dañan a terceros están fuera de la acción de la ley. Esto se refiere al principio de libertad.
- El artículo 30 garantiza “el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”.
- El artículo 33 indica que “Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.
- El artículo 41 garantiza que “ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerse justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.

También podemos citar las siguientes disposiciones de algunos instrumentos internacionales:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos:

En su artículo 8° indica que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley”.

El artículo 12 proclama que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

El artículo 5° declara que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”.

El artículo 18 proclama que “Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.

La actual revolución tecnológica y la “autopista de la información” han facilitado muchos medios que ponen en peligro esta gama de derechos ligados al desarrollo en sociedad de la persona. “La aparición de nuevas técnicas, el abuso del poder, la necesidad de contar con información de las personas y la libertad de información, constituyen un meollo en el cual la legislación necesita proteger la vida privada de las personas, para que no sea avasallada esa privacidad, especialmente por la informática, a través de la protección de datos, pero no únicamente por esta forma”.¹

Argentina, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que “la privacidad e intimidad protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituido por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos (...) cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significan un peligro real o potencial a la intimidad”. (CSJN, 15-IV-1993).

La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que “la información es propiedad que se compra y se vende; y ante los traficantes de la intimidad, el derecho protege también la vida privada, el debido proceso libre de todo perjuicio sensacionalista, el derecho al silencio, a no exhibirse, a hacer el bien sin espectáculo, a mantener en secreto los aspectos más delicados de la intimidad fuera de toda curiosidad agresiva, indagación oliscosa o mofa”. (CSJN/ 8-IX-1992).

Con la enorme cantidad de información que circula se va constituyendo un enorme poder informático que puede crear un perfil subjetivo de la persona, estigmatizándola, con la consecuente limitación del pleno uso de sus derechos. Sobre la discriminación podemos decir que significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, gremiales, ideológicos, sexuales, sociales, etc. La discriminación se ha desarrollado del modo más grave para la especie humana, distintos grados, pero siempre fundada en perjuicio, ignorancia y temor. El exterminio, la muerte, la esclavitud, el apartheid, el desplazamiento cultural o social, etc. Usualmente los que más sufren este flagelo son los grupos minoritarios o más débiles: negros, indígenas, mujeres, niños, pueblos como los gitanos, los armenios, los curdos y judíos, entre otros. Sin embargo, esto puede afectar a cualquier persona.

Si bien en la doctrina tradicional se pueden encontrar dos instrumentos básicos para la protección de los derechos ciudadanos consagrados por los ordenamientos jurídicos, como el recurso de hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, y el recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de otros derechos consagrados en las constituciones, así como los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, recientemente la doctrina y la legislación de varios países han incorporado a los instrumentos de protección de los derechos y libertades fundamentales un nuevo instrumento de protección: el **hábeas data**.

El hábeas data pretende tutelar uno de los principales derechos fundamentales, un nuevo derecho reconocido por la doctrina, la jurisprudencia y algunas legislaciones avanzadas. El derecho a la autodeterminación informativa proviene del derecho a la intimidad, aunque no se limita a ella, sino que la trasciende. El derecho a la autodeterminación informativa va más allá de la esfera privada, protegiendo el derecho a la disposición de los datos; se refiere al consentimiento en el uso de un dato personal y a la posibilidad de supervisar que se utilice con apego a un fin legal y de previo determinado, de modo que a partir del acceso a la información exista la posibilidad de solicitar la corrección, actualización, modificación, eliminación, inclusión o pretensión de confidencialidad sobre la información objeto de la tutela. La autodeterminación informativa puede afectar los derechos de la personalidad dentro de los cuales se encuentran la intimidad, la imagen y el honor. El otro derecho que tutela es la libertad informática, que proviene de la libertad personal, la cual garantiza la igualdad, el trato no discriminatorio en la esfera comercial y en la esfera laboral, entre otros. Este instrumento es una garantía de defensa para la persona frente a otros, que podrían ser el Estado, un ente privado o personas físicas o jurídicas, según se trate de un registro público o privado o de una investigación en manos de particulares o empresas.

El hábeas data propuesto es un instrumento para remediar situaciones anómalas cuyos efectos perjudiquen al ciudadano, pero no puede ser una solución a priori.²

Algunas de las principales definiciones son:

Hábeas data: “Un remedio urgente para que las personas puedan obtener:

- a) El conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, y
- b) En su caso para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos”.³

Ana Rosa González Morúa lo define para “que la persona goce de un verdadero control de las informaciones que a ella le conciernen y de este modo evitar que el uso indebido de la información afecte su esfera de derechos y libertades”⁴. Esta definición es importante ya que amplía el concepto inicial de hábeas data, proyectándose asimismo a información que sin ser propia concierne al individuo, por tener interés legítimo sobre la misma, sea en su condición personal o como integrante de un grupo social más amplio, ante una eventual discriminación, lesión y perjuicio.

El hábeas data se constituye como un amparo especializado, por lo que cabe cuestionarse por qué no dejar que el actual recurso de amparo se encargue de estos asuntos. La respuesta es fácil. Tomando en cuenta el grave daño que puede ocasionar, por ejemplo, la incursión errónea del nombre de un individuo a una lista de morosos de una institución financiera, no podemos permitirnos resolver estas importantes lesiones personales por la vía ordinaria del amparo. No son pocas las veces en que un amparo se resuelve en un período mayor a los doce o veinticuatro meses. Consideramos que cumplido este plazo, el daño sería irreparable. Todas las personas brindan datos personales constantemente sin imaginar que en conjunto estos crean una “identidad” del sujeto.

Alfredo Chirino sostiene que existe una cercana relación entre el hábeas data y el hábeas corpus ya que ambos protegen esferas distintas de la libertad personal: “por un lado el hábeas corpus garantiza la libertad corporal personal, mientras que el hábeas data garantiza el derecho de disponer de los datos personales (una protección a la identidad informática del ciudadano). Al ser humano debe asegurarse la disposición libre de su cuerpo al igual que de sus datos personales”.⁵

Más que una tutela a la libertad personal el hábeas data debe tutelar a la persona.

Ante la irreparable lesión a esa identidad que es la que permite que seamos sujetos de crédito, contratables en una empresa, participantes en obras de concesión del Estado, políticos y todas las esferas en donde un sujeto se desenvuelve en la sociedad, la imperante necesidad de un recurso de trámite prioritario, de efectos procesales como la exhibición, la certificación, la inclusión, adecuación al fin, confidencialidad, la suspensión, la eliminación, todos dentro de los plazos prioritarios mencionados anteriormente, que garanticen nuestros derechos constitucionales.

² Chaverri Álvarez, Alejandra & López Fuscaldó, Gloriana. “El hábeas data en Costa Rica”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, II semestre de 1995, San José, Costa Rica.

³ Falcón, Enrique. op. cit., p. 23.

⁴ González Murúa, Ana Rosa. *El Derecho a la Intimidad, el Derecho a la Autodeterminación Informativa (...)*, Instituto de Ciencias Sociales, Barcelona, 1994.

⁵ Chirino, Eric Alfredo, *Informática y Derecho a la Intimidad: Perspectivas de Política Criminal*, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia, San José, 1991.

¹ Falcón, Enrique. “Hábeas Data: Concepto y Procedimiento”, Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1996, p. 40.

En la situación tecnológica propia de la sociedad contemporánea, todos los ciudadanos, desde su nacimiento, se "hallan expuestos a violaciones en su intimidad, perpetradas por determinados abusos de la informática y la telemática. La injerencia del ordenador en las diversas esferas y en el tejido de las relaciones que conforman la vida cotidiana, se hace cada vez más extendida, más difusa y más implacable. Esta proyección de los efectos del uso de la informática sobre la identidad y dignidad humanas, inciden también en el disfrute de los valores de la libertad y la igualdad. (...) El Hábeas Data constituye, en suma, el cause procesal para salvaguardar la libertad en la persona de la esfera informática.(...)"⁶

Este instrumento pretende regular dos pretensiones sucesivas, una subsidiaria de la otra, la primera de acceso a la información y la segunda de conocimiento y ejecución en donde se podrán solicitar las pretensiones de rectificación, actualización, supresión, inclusión, adecuación al fin, confidencialidad, la suspensión y la eliminación.

En el tema del hábeas data, convergen varios campos:

- El derecho a la intimidad.
- La libertad.
- La igualdad.
- El derecho a la información.
- La identidad de la persona.
- El poder informático.
- La discriminación.
- Los registros (registros en sentido amplio, listados manuales, ficheros, archivos y bancos de datos, entre otros).
- Los derechos humanos.
- La informática y la telemática.

En cuanto al requerimiento que se haga con los datos relacionados, se puede considerar:

- El acceso: Para conocer la información y verificar si procede alguna de las otras pretensiones.
- La certificación de datos, para efectos probatorios.
- La supresión de datos, especialmente aquellos sensibles relativos a las convicciones religiosas, ideas gremiales o políticas, cuestiones de comportamiento sexual, raza, etc. Este aspecto está relacionado con la discriminación. En cuanto a los datos sensibles es importante hacer una aclaración: dependiendo de la situación y el contexto, cualquier dato puede ser sensible, la ocupación en el caso de una bailarina exótica; el alcoholismo para aquellas personas bajo control, el estado civil y el color de la piel en una bolsa de trabajo.
- Rectificación y supresión: El fin de estas modificaciones es que los datos sean veraces y entra dentro del criterio de la falsedad, pues un dato erróneo o descatolizado es, en definitiva, falso y puede afectar derechos personales. Así como un dato intrascendente o que se torne extemporáneo.
- Inclusión: Ante la necesidad de que parta beneficio o en honor a la verdad conste una condición personal obviada como por ejemplo: la profesión.
- Confidencialidad: Cuando una información en razón de su origen debe ser protegida.
- Adecuación al fin: Los datos que aparecen en el registro deben justificarse en razón del fin legal del registro.

Según el profesor argentino, Dr. Miguel Ángel Ekmekdjian,⁷ los principales objetivos del hábeas data son cuatro:

- Acceder a los registros para controlar los datos propios y del grupo familiar.
- Actualizar los datos obsoletos o corregir los inexactos.
- Asegurar la confidencialidad de ciertos datos (por ejemplo, los estados de cuentas de una empresa presentados ante un organismo oficial).
- Omitir o cancelar datos de la información sensible cuya divulgación podría lesionar gravemente el derecho a la intimidad (ideas políticas, religiosas, orientación sexual o cualquier otro dato que pueda ser potencialmente discriminatorio).

Si bien es cierto, que en Costa Rica existe todo un aparato institucional y jurídico que ha permitido avanzar en materia constitucional de manera sorprendente y regular los abusos de terceros a los derechos ciudadanos, existe aún un control no muy claro y específico con respecto al derecho a la vida privada y a la informática. Hoy en día, en el país, mediante los diferentes entes gubernamentales, empresas privadas y particulares, se ha instalado toda una estructura informática, capaz de procesar y tener acceso a información confidencial de vital importancia para la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, sin que exista, hasta el momento, un mecanismo claro que proteja al ciudadano de una posible manipulación de los datos personales que lesionen sus derechos.

"En nuestro país existe una importante cantidad de archivos o centros de datos, (...) datos que se recolectan manejan y archivan en razón de un fin -que aunque legal, no siempre es válido en mi opinión- pero que de cualquier modo, han sido obtenidos bajo una justificación. El problema surge a partir de diversas premisas; cuando el mencionado fin se aparta de

los lineamientos del Estado de Derecho y tiende a ser posesionista, cuando la veracidad del dato no es rigurosa, cuando se trata de datos íntimos que por esta condición no deberían nacer a la vista pública, o cuando la manipulación de esa información puede ser ampliamente o fácilmente accesada. En diversas situaciones brindamos información propia a múltiples órganos públicos o privados con un motivo, sin tener conciencia del poder que estamos fomentando.(...) La realidad de nuestro país es que, con gran facilidad se consiguen datos de las personas. Estos podrían ser manipulados, ser falsos o ser conocidos a pesar de su carácter íntimo. La magnitud del problema no "se limita a la privacidad de cada quien, sino, y lo grave, es que a cualquier ciudadano se le puede estigmatizar, creándole una seria limitación para su desarrollo en sociedad."⁸

La investigación de las licenciadas Chaverri y López ha arrojado un descubrimiento claro. El sistema constitucional de nuestro país carece de un instrumento preciso que regule la manipulación y el procesamiento de la información. Desgraciadamente, es poca la información nacional sobre este tema. Por tanto, las recomendaciones que hacen las investigadoras han constituido un fuerte apoyo al presente proyecto de ley.

Como se ha establecido claramente, es imperativo para el país crear un instrumento accesible para el ciudadano común, que limite el uso de los registros de información personal. Un registro es un lugar, archivo u oficina donde se asientan datos. Estos datos se pueden incluir en padrones, protocolos, ficheros, etc., y pueden ser manuales o informáticos. Los datos registrados pueden pertenecer a una persona, a una cosa o a la relación de ambas. Algunos de los ejemplos más comunes son: archivos personales, comerciales, impositivos, de propiedad, políticos, sanitarios, de información y de registro. Estos bancos de datos cerrarán en el futuro todos los informes útiles de la vida cotidiana y podremos interrogarlos directamente desde nuestra casa. Cada vez es mayor el número de personas que se estremecen al sentir que la masa de datos escapa de su control y al pensar que sus vidas pueden sufrir daños debido al mal uso y al encadenamiento de los registros (en sentido amplio).⁹

Los registros deben obtener los datos por medios lícitos; tales datos deben utilizarse para fines determinados a priori; se debe garantizar la fidelidad de los datos; la prohibición de suministrar datos a terceros debe ser clara. Salvo conformidad del interesado o excepciones especiales, debe existir la prohibición de recoger información sensible, así como se debe establecer una responsabilidad objetiva de los registros, si se causara un daño al titular de los datos.

Deben estar legitimados activamente para interponer el recurso de hábeas data:

- Las personas físicas.
- Los herederos del difunto: ascendientes y descendientes, los colaterales hasta el cuarto grado, el cónyuge por los derechos del difunto.
- El Defensor de los Habitantes.
- Las asociaciones representativas de habitantes, por actos de discriminación.

La protección del hábeas data tiene un sentido preventivo, un sentido cautelar; sin embargo, puede suceder que el daño se produzca con motivo y en ocasión del uso de datos personales provenientes de archivos, registros o bancos de datos. Una vez violada la reserva de la información, el hábeas data servirá para proteger a los ciudadanos de una violación futura y garantizar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Como se destacó anteriormente, el hábeas data comprende dos pretensiones sucesivas, una subsidiaria de la otra. La primera etapa es de información, de naturaleza informativa y voluntaria. La segunda es de conocimiento y ejecución, puede tener el carácter contencioso.

La justificación más importante para crear el recurso de hábeas data como vía especializada, estriba en "la necesidad de establecer un procedimiento sumarisimo, con efectos procesales impuestos por ley, que aseguren la eficaz y pronta protección de la identidad informática de la persona, cuando el poder informático prive de la disponibilidad sobre sus datos personales. Si bien es cierto que este novedoso recurso surge como un amparo especializado, tiene características muy particulares. La protección de la identidad informática de todo individuo obliga a crear un remedio que responda a las características de urgencia presentes en una violación potencial o real de la disponibilidad de la persona sobre aquello que afecte su identidad, reputación, intimidad, en fin, todo lo que le permite proyectarse a los demás, que debe ser resguardado por mecanismos con mucha mayor agilidad y prontitud que la ofrecida actualmente por los recursos de amparo. Se debe contar con medidas capaces de evitar el daño o restablecer la situación que ha sido menoscabada, en el menor tiempo posible. Por esta razón, el recurso de hábeas data debe incorporarse como un amparo específico, pero de tramitación prioritaria entre los amparos".¹⁰

Como se ha dicho, son muchos los ordenamientos jurídicos que ya han incorporado este instrumento. A continuación citamos algunos:

Con la promulgación de la "Datenschutz" de 7 de abril de 1970, por el Parlamento del Estado alemán de Hesse, este territorio se convirtió en el primero con una norma dirigida a "la protección de datos, que tiene como

⁶ Pérez Luño, Antonio, "Del Hábeas Corpus al Hábeas Data", citado por Enrique Falcón, op. cit., p. 28.

⁷ Ekmekdjian, Miguel Ángel. *El Derecho a la Intimidad frente a la Revolución Informática*, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 96.

⁸ Chaverri Álvarez, Alejandra y López Fuscaldo, Gloriana, op. cit.

⁹ Falcón, Enrique, op. cit., p. 52-53.

¹⁰ Chaverri Álvarez, Alejandra y López Fuscaldo, Gloriana, op. cit.

En impedir la lesión de bienes dignos de tutela de las personas interesadas, garantizando los datos relativos a su persona, de abusos cometidos con ocasión de su almacenamiento, transmisión, modificación o cancelación. El 27 de febrero de 1977, el Parlamento federal alemán sigue los pasos del Parlamento regional de Hesse y aprueba la Datenschutzzgesetz. En estos casos, se crea un Comisario Federal para la Protección de Datos (Bundesbeauftragter für den Datenschutz).

En Suecia, el 11 de mayo de 1973, se promulga el "Data Lag", con la misma finalidad de proteger a los individuos del mal uso de los datos y de la información personal, por medio de registros y archivos.

El 31 de diciembre de 1974, en medio del escándalo Watergate y ante el temor sobre el uso que el Gobierno puede hacer de los ordenadores y de los sistemas informáticos, el Congreso norteamericano promulga el "Privacy Act". "El núcleo de esta ley reside en la protección de los individuos frente al asalto a su intimidad por sistemas de acopio y almacenamiento de datos derivados del uso de la tecnología informática por las agencias federales".¹¹

El artículo 35 de la Constitución portuguesa de 1976, establece lo siguiente "Todos los ciudadanos tienen derecho a tomar conocimiento de los datos contenidos en ficheros o registros informáticos a su respecto, pudiendo exigir su rectificación y actualización, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes sobre secretos de Estado (...) Está prohibido el acceso a ficheros y registros informáticos para conocer datos personales de terceros, o por interconexión, salvo los casos excepcionales previstos por la ley. La informática no puede ser para el tratamiento de datos referidos a convicciones filosóficas o políticas, de filiación partidaria o sindical, fe religiosa o vida privada, salvo cuando se trate de procesamiento de datos estadísticos, que no se identifiquen individualmente".

En 1978, Francia estableció la Commission Nationale de la Informatique et des Libertés, una institución de estructura colegiada, encargada de elaborar un registro o archivo de archivos en el que se inscriben los diversos bancos de datos, así como su naturaleza, su funcionamiento y sus finalidades. Este registro se encuentra a disposición de los ciudadanos para que puedan ejercer el derecho de acceso a las informaciones que les conciernen.

También en 1978, la Constitución española contempla esta regulación por medio del inciso 4) del artículo 18, el cual dice: "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos..."

En 1984, el Parlamento británico promulga el "Data Protection Act" cuerpo legal destinado a proteger una parte especial de la intimidad de las personas: la que tiene que ver con sus datos personales.

La Constitución de Brasil, en su artículo 5º, inciso LXXII, expresa que se concederá el hábeas data para: a) asegurar el conocimiento de información relativa a la persona del demandante, que consiste en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público, y b) rectificar datos cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo. En Brasil se presenta el hábeas data como un procedimiento independiente del amparo.

En Perú, la Constitución de 1993, prohíbe expresamente que los servicios informáticos, computadorizados o no, públicos o privados, suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar (artículo 2º, inciso 6). Posteriormente, el artículo 200 establece el procedimiento del hábeas data. En este último caso, la Constitución peruana presenta como instrumento innovativo para regular esta materia al "hábeas data", el cual, según Jorge Avendaño, catedrático en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú, es una garantía que procede "... contra el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a la libertad de información, a la intimidad personal o familiar, al honor y a la buena reputación, a la voz y a la imagen propias. Mediante esta garantía, se puede tener acceso a la información pública, así como solicitar la rectificación o destrucción de la información inexacta contenida en bancos de datos cuyo uso indebido afecte los derechos constitucionales antes referidos. Por ejemplo, cuando una persona aparece en los registros policiales con una orden de detención, siendo que esta nunca ha existido o que fue levantada, mediante el hábeas data se subsanará el error. Del mismo modo, cuando alguna entidad pública o privada mantenga información falsa sobre alguna persona y fuere a divulgarla, con perjuicio del derecho al honor y buena reputación, mediante el hábeas data podrá evitarse que la violación se consuma".¹²

En Argentina, con la nueva Constitución de 1994, el artículo 43 declara: "(...) Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que conste en registros o bancos de datos públicos destinados a proveer informes, y en caso de falsedad y discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto a las fuentes de información periodísticas. (...)".

En el nivel provincial, casi todas las provincias han regulado este instrumento, por ejemplo:

Provincia de Buenos Aires. El inciso c) del artículo 20 de la Constitución de esta provincia, regula el hábeas data de la siguiente manera: "A través de la garantía del hábeas Data, que se regirá por el procedimiento que la ley determine, toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en registros, listados, archivos o bancos de datos de organismos públicos o privados destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine la información, y a requerir su rectificación, actualización o cancelación. No podrá afectarse el secreto de las fuentes y el contenido de la información

periodística. Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios ni será proporcionado a tercero, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de la informática no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. Todas las garantías precedentes son operativas. En ausencia de reglamentación, los jueces resolverán sobre la procedencia de las acciones que se promuevan, en consideración a la naturaleza de los derechos que se pretenden tutelar".

Provincia de Córdoba. La Constitución de esta provincia argentina, en su artículo 50 estipula: "Toda persona tiene derecho a conocer lo que de él conste en forma de registro, la finalidad a que se destina esa información, y a exigir su rectificación y actualización. Dichos datos no pueden registrarse con fines discriminatorios de ninguna clase ni ser proporcionados a terceros, excepto cuando tengan un interés legítimo. La ley reglamentará el uso de la informática para que no vulnere el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos."

La redacción de las dos normas anteriores ha limitado la utilización de estos recursos a personas físicas, al dejar por fuera a las personas jurídicas.

Provincia del Chaco. La provincia del Chaco da la siguiente definición: "Hábeas Data. Toda persona tiene derecho a informarse de los datos que sobre sí mismo, o sobre sus bienes, obren en forma de registros o sistemas oficiales o privados de carácter público; la finalidad a que se destine esa información, y a exigir su actualización, corrección, supresión o confidencialidad. Tales datos no podrán ser utilizados con fines discriminatorios de ninguna especie. No podrá afectarse el secreto de las fuentes periodísticas. Ningún juez podrá excusar la denegación de acciones contempladas en este artículo en el hecho de no haberse sancionado las leyes reglamentarias, en cuyo caso deberá arbitrar las medidas procesales adecuadas. Tampoco podrá negarse a entender en las acciones o resolverlas en violación de los plazos previstos. No podrán los funcionarios o empleados negarse al cumplimiento de la orden judicial respectiva. Si lo hicieren serán enjuiciados, y en su caso, removidos".

Provincia de Chubut. En el artículo 56 de la Constitución dice: "Hábeas Data. Toda persona puede interponer acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que conste en registros o bancos de datos públicos o en los privados destinados a proveer informes y en caso de error, omisión, falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No puede afectarse el secreto de la fuente de información periodística".

Provincia de Jujuy. Manifiesta mediante el inciso 6) del artículo 23: "Todas las personas tienen derecho a tomar conocimiento de lo que constare a su respecto en los registros provinciales de antecedentes personales y del destino de esas informaciones, pudiendo exigir la rectificación de datos. Queda prohibido el acceso de terceros a esos datos, así como su comunicación o divulgación, salvo en los casos expresamente previstos por la ley".

En el nivel multilateral podemos mencionar:

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", en sus incisos segundo y tercero del artículo 11, expresa que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Esta norma implícitamente se refiere al asunto de nuestro interés, al hábeas data.
- En el ámbito de las Naciones Unidas, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esos ataques". En términos similares se redactó el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Recientemente, la 45ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, adoptó una normativa de la regulación de datos personales automatizados, denominada "Directriz para la Regulación de Ficheros Automáticos de Datos Personales". Este documento pretende concientizar a los Estados sobre la importancia de establecer principios defensores de la protección de datos de carácter personal.

Pero no solo los ordenamientos escritos han facilitado este desarrollo. Los tribunales de justicia, por medio de su jurisprudencia, han sido una parte importante en este proceso. Por ejemplo en Argentina, la Corte Suprema ha reconocido que: "Dentro de las garantías introducidas por la reforma (constitucional de 1994), se halla el hábeas data o derecho que tiene toda persona a interponer la acción de amparo(...). Se trata de una variable del derecho a la intimidad, consagrado en el ratificado texto histórico del artículo 19 de la Constitución Nacional(...). La finalidad del hábeas data es impedir que en bancos o registros de datos se recopile información respecto a la persona titular del derecho que interpone la acción, cuando dicha información esté referida a aspectos de su personalidad que están directamente vinculados con su intimidad(...)"¹³

La doctrina ha aceptado el recurso de hábeas data como un instrumento básico de protección de la persona. Son muchos los países que ya han incorporado este instrumento de avanzada a sus ordenamientos

¹¹ Ekmekdjian, op. cit., p. 33.

¹² Avendaño, Jorge, *Garantías Constitucionales*. Lima, Perú, 1993.

¹³ Jurisprudencia Cámara Nacional en lo Civil, Sala H in re "Rossetti Serra, Salvador, c. Dun & Bradstreet s.r.l.", de 25 de setiembre de 1995. Buenos Aires, Argentina.

jurídicos. Costa Rica, país reconocido por su histórico desarrollo jurídico, no puede ni debe quedarse rezagada en esta tendencia mundial. Hay diversas opiniones de cómo se debe regular este instrumento en el ordenamiento jurídico costarricense. Es evidente que lo óptimo sería una reforma constitucional, pero debido al largo trámite que implicaría, hemos considerado que por medio de una reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es la manera más conveniente. Esto no limitaría la posibilidad de que en un futuro pueda ser incorporado tan importante instrumento al texto constitucional. En ese sentido, es imprescindible establecer el hábeas data como un amparo específico, dentro de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en un nuevo Capítulo IV denominado "Del recurso de hábeas data", pues la estructura normativa del amparo ofrece la cobertura jurídica suficiente para aplicarlo de manera ágil e inmediata, con el fin de dotar al ciudadano de este mecanismo por el cual pueda tutelar su libertad informática, con un procedimiento ágil y sumario que permita resolver estos asuntos con la urgencia que ameritan.

Si bien es cierto, las leyes sustanciales han pretendido limitar el poder informático mediante normas que regulan el funcionamiento de bancos de datos, la persona necesita contar con un instrumento procesal que se adapte a la rápida transformación tecnológica para impugnar los usos y abusos de este poder, cuando estén en detrimento de sus derechos o intereses. Es por esto que la Sala Constitucional debe, con criterios de razonabilidad, adaptar el recurso a las necesidades y al cambio de los tiempos de modo casuístico.

El hábeas data ofrece un "remedio" procesal íntimamente relacionado con la disponibilidad de información capaz de afectar la identidad informática de los sujetos. Protege dos fases de la libertad: la primera, será la propia o relativa a datos propios. La segunda, el hábeas data impropio, ampara el derecho de acceso a la información que se tiene interés legítimo en conocer. En el hábeas data propio se reconocen, los derechos de acceso, modificación, adecuación al fin, confidencialidad, eliminación e inclusión con respecto a los datos sobre la persona recurrente. En nuestro país, muchos son los ejemplos de situaciones que podrían haberse evitado si nuestro ordenamiento jurídico contara con tan necesario instrumento. Podemos citar un caso resuelto por la Defensoría de los Habitantes de la República. Después de más de dos años de gestiones, el señor R. O. B. acude a la Defensoría para solicitar ayuda pues el Banco Nacional lo había incluido-indebidamente- en una lista de deudores con esa institución que se denomina "Código de Morosos" y que circula entre todas las instituciones bancarias del país, hecho por el cual no se le aceptó como fiador en una operación de crédito que habría de formalizarse en otro banco estatal. Esta lista puede definirse como una "lista negra" y quien se encuentre en ella no consigue crédito ni financiamiento en los bancos estatales o privados. A pesar de que, el 17 de marzo de 1993, se dirigió al gerente general del banco y realizó muchas otras gestiones, dos años más tarde no se había resuelto el problema, **con lo cual se ocasionó un grave perjuicio moral y un eminente perjuicio económico, al no ser sujeto de crédito.** No fue sino hasta después de más de un año de gestiones por parte de funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, incluyendo al propio señor Defensor de los Habitantes, que finalmente el Banco Nacional accedió a excluir al individuo mencionado de la citada lista.¹⁴ Como es claro, el grave perjuicio sufrido por este ciudadano es un ejemplo de situaciones que ocurren a diario. El hábeas data es el mecanismo ideal para evitar estas situaciones o, en su defecto, para corregirlas con la urgencia que ameritan.

En el hábeas data impropio, la información ajena podrá ser accedida en razón de un interés legítimo de un sujeto o de una colectividad. En este sentido, nuestra Constitución, en su artículo 27 declara: "Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución". Por medio del hábeas data impropio, la Sala Constitucional determinará si determinada información no propia puede ser accedida por un sujeto dado su interés legítimo y posible afectación a su persona o determinará a quién corresponde mejor derecho entre dos o más partes en pugna por resguardar la confidencialidad de la información o por ejercer el derecho a la información.

La Sala Constitucional podría, ante solicitud de parte legitimada, verificar si un secreto de Estado está válidamente decretado según los lineamientos de nuestro ordenamiento jurídico. El Estado de derechos debe tener mecanismos de pesos y contrapesos para evitar los abusos, tan comunes en aquellos órganos que carecen de controles institucionalizados. Es el juez constitucional un funcionario imparcial, el más apto para determinar la procedencia o no de la declaratoria. Este mecanismo es importante para evitar que se repitan situaciones tan lamentables como aquellas ocurridas en meses pasados. En atención al artículo 30 Constitucional, es importante recordar que nuestra Carta Magna "garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público". Es cierto que el mismo artículo exceptúa los secretos de Estado, pero ¿qué información podemos considerar "secreto de Estado"? Debemos limitar esta amplia posibilidad de interpretar qué es considerado un secreto de Estado, pues solamente la Sala Constitucional puede evaluar, de manera independiente de cuestiones políticas y apejándose al texto constitucional, aquella información que amerita esta protección especial. Caso contrario, se deja abierta la posibilidad de limitar seriamente el ejercicio de los derechos constitucionales.

Por medio de un hábeas data impropio, podría solicitarse acceso a los datos que motivaron para que una persona, física o jurídica, haya sido favorecida en un concurso de antecedentes o licitación, en perjuicio del sujeto que demuestre su interés legítimo. Por ejemplo, que conozca su idoneidad para el puesto por encima del favorecido. Piénsese también en la justificación de un ciudadano al que se le ha negado el acceso a un voto de la Sala Constitucional, por ejemplo, donde sin ser parte se le cause un grave perjuicio por esta jurisprudencia vinculante.

El recurso de hábeas data se configura como un procedimiento de resolución inmediata, con plazos cortos y efectos inmediatos, que busca la cesación o prevención de daños a personas físicas o jurídicas, ante un rechazo o negación de sus derechos constitucionales, incluyendo la libertad informática y la autodeterminación informativa, que desarrolla la igualdad, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, el derecho a la sindicalización, el derecho a ser sujeto de crédito, el derecho a la intimidad, entre otros. Dada la importancia de este instrumento jurídico para el pleno goce de los derechos y el desenvolvimiento del ciudadano costarricense, sometemos a la consideración de las señoras y los señores diputados la siguiente iniciativa.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO IV, DENOMINADO "DEL RECURSO DE HÁBEAS DATA", AL TÍTULO III DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, LEY N° 7135, DE 11 DE OCTUBRE DE 1989

Artículo 1°—Adiciónase un nuevo Capítulo IV, denominado "Del recurso de hábeas data", al título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, N° 7135, de 11 de octubre de 1989. En consecuencia, se corre la numeración de los artículos siguientes.

El texto del nuevo capítulo dirá:

"Capítulo IV

Del recurso de hábeas data

Artículo 71.—El recurso de hábeas data tiene por objeto proteger de manera procedimental el derecho de la persona a su intimidad, imagen, honor, autodeterminación informativa y libertad informática en el tratamiento de sus datos personales. Asimismo, es objeto de este recurso garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos y las libertades concernientes a los datos y la información de carácter personal.

Artículo 72.—El recurso de hábeas data podrá plantearse en los siguientes casos:

- Toda persona, física o jurídica, podrá plantearlo para conocer lo que conste sobre sí misma o sus bienes en registros, archivos, listados o bancos de datos, sean manuales, mecánicos, electrónicos o informatizados, públicos o privados. No podrán solicitarse datos sobre una investigación judicial por la comisión de algún delito, mientras no haya concluido el proceso investigador.
- La pretensión del recurso de hábeas data puede consistir en solicitar información sobre la finalidad de los datos personales recogidos, su destino final y su eventual entrega en otros lugares de procesamiento de datos distintos del lugar que, en primera instancia, recolectó los datos.
- Mediante el recurso de hábeas data podrá requerirse la rectificación, actualización, inclusión, confidencialidad o cancelación inmediata de los datos personales que están poder del lugar de tratamiento de los datos, ya sea público o privado.
- El recurso de hábeas data también procederá para solicitar informaciones declaradas secreto de Estado. La Sala en pleno deberá determinar si tales informaciones se ajustan a los requerimientos constitucionales. Para los efectos de esta norma, secretos de Estado son los asuntos en tramitación, de carácter diplomático o referidos a operaciones de seguridad nacional pendientes.
- Podrá plantearse el recurso de hábeas data cuando se haya lesionado alguno de los principios relacionados con el procesamiento de datos personales descritos en el artículo 73.
- El afectado podrá impugnar, mediante la presentación del recurso de hábeas data, los actos administrativos o las decisiones de carácter particular que impliquen una valoración de su comportamiento, cuya única base sea un tratamiento de datos personales que defina sus características o personalidad.

Artículo 73.—El tratamiento de datos personales, tanto en el ámbito privado como público, deberá respetar y seguir los siguientes principios:

- Sólo podrán recogerse datos de carácter personal para someterlos a tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades legítimas para las que se han obtenido. Así se asegura el principio de calidad de los datos.
- Los datos personales objeto de tratamiento, no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que fueron recogidos.
- Los datos personales que se consignen en un determinado registro informatizado o manual han de ser exactos y puestos al día de forma que respondan verazmente a la situación real del afectado.

- d) Los datos de carácter personal serán cancelados cuando ya no sean necesarios ni pertinentes para la finalidad por la cual fueron recabados y registrados.
- e) Los datos de carácter personal deberán ser procesados de manera que el afectado pueda acceder a ellos.
- f) No será permitida la recolección de datos por medios fraudulentos, desleales ni ilícitos.
- g) El afectado deberá recibir información acerca del tratamiento de sus datos personales, de los objetivos o fines de dicho tratamiento, de los derechos que le competen según esta Ley para acceder los datos que, sobre su persona, estén consignados en el banco de datos, quiénes realizarán el tratamiento de datos y de cómo podrá ejercer su derecho de acceso a los datos y la revisión.
- h) El tratamiento automatizado de datos personales requerirá el consentimiento del interesado, salvo que la ley disponga otra cosa. Sin embargo, este consentimiento no será necesario en los casos de datos personales recogidos de fuentes accesibles al público o cuando se reúnan para fines de la Administración Pública en el marco de sus competencias legales o cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o un contrato y dichos datos se necesiten para mantener las relaciones o cumplir el contrato.

Artículo 74.—El recurso de hábeas data recibirá el trámite establecido para el amparo. Se resolverá con prioridad respecto a otros recursos de amparo, salvo los fundamentados en el derecho de rectificación y respuesta y el de petición. Deberá dictarse sentencia a más tardar cinco días naturales después de recibidas las pruebas del caso.

Artículo 75.—El recurso podrá ser interpuesto por:

- a) La persona física o su representante, en el caso de menores de edad o incapaces.
Los herederos del difunto.
- c) Las personas jurídicas.

Artículo 76.—El escrito inicial deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) El nombre y domicilio de quien interpone el recurso, ya sea persona física o jurídica.
- b) La indicación de cuál es el dato o la información personal que se controlará mediante el ejercicio del hábeas data, así como la relación circunstanciada del daño o perjuicio que el tratamiento automatizado le ha causado o pueda causarle.
- c) La identificación de la persona, oficina o institución que realizó el tratamiento de datos personales y la forma como se recolectó la información. Además, podrá incluirse una referencia de los lugares probables donde se conservan los datos o las informaciones de carácter personal objeto de este recurso.
- d) La indicación del tipo de efectos esperables de la resolución que acoge el recurso de hábeas data. Este requerimiento podrá ampliarse después de presentado el recurso.
- e) Acompañar la prueba que tiene a su disposición quien interpone el recurso.
- f) Las pretensiones habrán de indicarse por aparte y, si existe una pretensión indemnizatoria, deberá indicarse en qué consiste el daño o perjuicio, así como la prueba que permita apreciar su cuantía. Cuando no se conozcan con anterioridad los daños o perjuicios ocasionados por el procesamiento de los datos personales, estos podrán ser reclamados después en la jurisdicción correspondiente, mediante el proceso de ejecución de sentencia.

Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en los artículos 35, 36, 38 y 43 de la presente Ley y, de faltar alguno de los requisitos señalados, el presidente o el magistrado instructor así lo hará saber al recurrente y le concederá un plazo máximo de tres días hábiles para que corrija lo necesario. Si dentro de este plazo no se corrigen dichas omisiones, el asunto se rechazará de plano.

Artículo 77.—Si analizado el asunto, la Sala determina que se produjo lesión constitucional, así lo declarará y dictará las medidas que estime pertinentes para el cabal cumplimiento del fallo.

En todo caso, la Sala deberá velar porque no se divulgue información cuyo titular pueda resultar indebidamente afectado por el conocimiento que terceros puedan tener de ella, e incluso podrá imponerle al recurrente el deber de guardar secreto en relación con lo que conozca en razón de que el recurso interpuesto fue declarado con lugar.

Artículo 78.—El primer efecto del recurso será el de exhibición, que podrá ir acompañado del de certificación, si la parte interesada lo solicita. Al admitir el recurso, se ordenará al recurrido aportar la información objeto del asunto. Aunque se trate de datos confidenciales, la Sala tendrá acceso a dicha información; pero deberá tomar las medidas cautelares pertinentes a fin de que el contenido no trascienda de las partes. Asimismo, determinará a cuáles datos tendrá acceso el recurrente.

Artículo 79.—El segundo efecto del recurso es el de suspensión. Procederá siempre en carácter precautorio en los siguientes casos:

- a) Cuando el dato se esté transmitiendo y se impugne su confidencialidad, deberá suspenderse la transmisión o revelación del contenido.

- b) Cuando se trate de la inclusión de datos personales que revelen, entre otros, la ideología, la religión, las creencias, la filiación política, el origen racial, la salud o la orientación sexual de la persona, deberá suspenderse la inclusión de los datos, hasta tanto se determine que existió consentimiento válido del afectado en dicho tratamiento.
- c) Cuando la información se impugna por inexacta, falsa o desactualizada, debe suspenderse su transmisión.
- d) Cuando transmitir la información o almacenarla pueda causar en el futuro, daños irreparables o los cause ilegítimamente.

Según la urgencia del asunto y para evitar daños futuros o inmediatos, el magistrado instructor, al recibir el escrito de interposición, dictará la suspensión del acto o mecanismo que permita transmitir los datos o crear la central de información en un plazo de veinticuatro horas y por todo el tiempo que transcurra hasta la sentencia. Esta disposición también surtirá efectos sobre los registros conexos donde pueda aparecer el dato impugnado. El magistrado instructor o la Sala, en su caso, incurrirá en responsabilidad civil y disciplinaria cuando, por no ordenar tal mandamiento, el recurrente sufra perjuicios personales o económicos.

Artículo 80.—La sentencia que declare con lugar el recurso ordenará restituir al accionante, en el pleno goce del derecho constitucional conculcado, todo conforme a los numerales 51 a 56 de la presente Ley. Además, producirá la eliminación o supresión inmediata de la información o el dato impugnado, en los siguientes casos:

- a) Cuando exista tratamiento de información confidencial con fines de publicación o transmisión a terceros no legitimados para conocerla.
- b) Cuando haya tratamiento de datos evidentemente delicados como los aludidos en el inciso b) del artículo anterior, y no exista consentimiento expreso del interesado ni un fin legítimo para realizar sobre ellos un tratamiento.
- c) Cuando la permanencia de los datos en su fichero haya perdido la razón de ser, porque transcurrió el plazo de prescripción previsto en la ley para cada caso o cuando se haya alcanzado el fin para el cual fueron tratados.
- d) Cuando figure información obtenida mediante la comisión de un delito, desviación de poder, falta o negligencia del informante o el solicitante de la información, violación de las reglas o los principios del debido proceso o cuando, por conexión, debe eliminarse por haberse declarado ilegal la fuente que la dio a conocer.
- e) Cuando la información resulte innecesaria para los fines del registro, el archivo, la base de datos o el listado legítimos.

En el caso del inciso d) anterior, cuando el dato impugnado figure como elemento probatorio en un proceso judicial incoado contra el afectado, podrá solicitarse que ese dato no sea utilizado como prueba en su contra por haberse lesionado los derechos y las garantías que dan sentido al recurso de hábeas data.

Del mismo modo, la Sala ordenará al recurrido efectuar las correcciones, alteraciones o supresiones correspondientes y le concederá un plazo máximo de cinco días hábiles. Vencido este periodo, deberá verificar el cumplimiento de la orden impuesta. Asimismo, condenará en abstracto al recurrido al pago de las costas y los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán mediante un proceso de ejecución de sentencia, en la vía civil o en la contencioso-administrativa, según se trate de particulares o del Estado y sus instituciones respectivamente.

Artículo 81.—Para efectos del recurso de hábeas data, se definen los siguientes conceptos:

Datos personales: Información concerniente a personas físicas o jurídicas, identificadas o identificables.

Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos automatizados o no, que permitan la recolección, la grabación, la conservación, la elaboración, la modificación, el bloqueo y la cancelación de información, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

Responsable del fichero: Persona física o jurídica, pública o privada, y órgano administrativo que decida sobre la finalidad, el contenido y uso del tratamiento.

Afectado: Persona física o jurídica titular de los datos objeto del tratamiento automatizado o manual.”

Artículo 2°—Reformase el inciso a) del artículo 2° y el artículo 5° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, N° 7135, de 11 de octubre de 1989, cuyos textos dirán:

“Artículo 2°—Corresponderá específicamente a la jurisdicción constitucional:

- a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus, hábeas data y amparo, los derechos y las libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional vigente en Costa Rica.

(...)”

“Artículo 5°—La Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus, hábeas data y amparo, cuando se interpongan después de las horas laborales o en días feriados o de asueto. Para tales efectos, habrá siempre un magistrado de turno, quien les dará el curso inicial.”

Artículo 3°—Refórmense los actuales artículos 71 y 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, N° 7135, de 11 de octubre de 1989, los cuales pasarán a ser los artículos 82 y 83 respectivamente. En consecuencia, se corre la numeración de los artículos siguientes. El texto de los artículos será:

“Artículo 82.—Se impondrá prisión de seis meses a dos años, a quien reciba una orden que deba cumplir o hacerla cumplir o al jerarca o encargado de una institución o departamento que, conociendo una resolución dictada por la Sala Constitucional en una acción de inconstitucionalidad, recursos de amparo, hábeas corpus o hábeas data, no la acate ni la haga acatar, siempre que el delito no esté penado más gravemente.

Artículo 83.—Se impondrá prisión de dos a cuatro años a quien dé lugar a que se coja un nuevo recurso de amparo, hábeas corpus o hábeas data por repetirse, en daño de las mismas personas, las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un recurso anterior declarado procedente.”

Rige a partir de su publicación.

Rolando Laclé Castro, Diputado.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

San José, 18 de junio del 2002.—1 vez.—C-291620.—(48010).

N° 14.787

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN PARA QUE DONE UN TERRENO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Asamblea Legislativa:

Las razones primordiales por las que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) solicita, a la Municipalidad de Pérez Zeledón y al diputado suscrito, la donación de un terreno son:

- No posee oficinas propias; las que utilizan son alquiladas desde hace muchos años.
- Existe hacinamiento del personal.
- No hay estacionamiento para los vehículos del Ministerio; por lo tanto, carecen de seguridad.
- No puede remodelar ni mejorar el edificio.

La Dirección Regional del MINAE en la Región Brunca es el área de conservación más grande de todo el país; comprende desde el sector de El Guarco, en la provincia de Cartago hasta el sector de Coto Brus, en la frontera con Panamá. Además, tiene cuatro oficinas subregionales, que se encargan de la administración forestal (otorgamiento de permisos, control de industrias, etc.), la administración de la vida silvestre y la de tres parques nacionales: Tapantí, Chirripó, Internacional La Amistad y otras áreas silvestres protegidas.

Por otra parte, la Municipalidad de Pérez Zeledón, consciente de la importante labor de la Dirección Regional del MINAE en la Región Brunca, ya tomó el acuerdo que autoriza la donación de un terreno de su propiedad para la instalación de las oficinas regionales del Ministerio en dicho cantón, por lo que solamente se espera la autorización que concederá la ley respectiva.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a esta honorable Asamblea Legislativa la aprobación del presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN PARA QUE DONE UN TERRENO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Artículo único.—Autorízase a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que, de la propiedad inscrita en el Registro Público Nacional, Sección de Propiedades, partido de San José, bajo el sistema de folio real matrícula N° 1-285641-000, segregue un lote de tres mil quinientos cuarenta metros con cuarenta y tres decímetros cuadrados (3.540,43 m²) y lo done al Ministerio de Ambiente y Energía. El lote mencionado es terreno para construir y está situado en el distrito 3° del cantón XIX de la provincia de San José. Sus linderos son: al norte, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; al sur, la Municipalidad de Pérez Zeledón; al este y oeste, calle pública, según describe el plano catastrado SJ-672626-2000.

La finalidad de la donación es construir, en el lote descrito, el edificio que albergará las instalaciones del citado Ministerio en el cantón de Pérez Zeledón, así como oficinas, parqueos y las instalaciones necesarias para que las habiten los funcionarios que no viven en el cantón y los que van de paso por la zona.

Rige a partir de su publicación.

Olman Vargas Cubero, Diputado.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

San José, 11 de junio del 2002.—1 vez.—C-16220.—(48011).

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N° 30451-G

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución Política y en la Ley N° 6725 de 10 de marzo de 1982 y reformado por Ley N° 7974 del 4 de enero del dos mil y acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 03-2002, celebrada el 18 de enero del 2002, inciso 32) capítulo V, de la Municipalidad de Montes de Oro.

DECRETAN:

Artículo 1°—Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Montes de Oro de la provincia de Puntarenas, el día 16 de julio del 2002, con las salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de los festejos cívicos de dicho cantón.

Artículo 2°—En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca de dicha institución el que determine en base al artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, cuál o cuáles días de los autorizados se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón.

Artículo 3°—En relación a los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, será el jerarca del Ministerio de Hacienda, el que determine con base en el artículo 14, párrafo segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón.

Artículo 4°—Rige el día 16 de julio del 2002.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los dieciséis días del mes de junio del 2002.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Rogelio Ramos Martínez.—1 vez.—(Solicitud N° 4072).—C-5420.—(47970).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

N° 34-P.—San José, 17 de junio del 2002

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con fundamento en el artículo 139 de la Constitución Política.

ACUERDA:

Artículo 1°—Designar al señor Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República, cédula número 1-231-001, para que viaje a Managua, Nicaragua en visita oficial para participar en la XXI Reunión Ordinaria de Presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Primer Ministro de Belice. La salida del señor Pacheco de la Espriella se efectuará el día 19 de junio y regresando el día 21 de junio, ambas fechas del presente año.

Artículo 2°—Los viáticos y transportes serán cubiertos por el título 104-Presidencia de la República, Programa 02100-Administración superior, subpartida 132-gastos de viaje en el exterior y 142-transporte o para el exterior.

Artículo 3°—Rige a partir del 19 al 21 de junio del 2002.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—(Solicitud N° 118-02).—C-4880.—(47378).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

N° 21-PE.—San José, 17 de junio del 2002

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previstos en el artículo 140, incisos 20 y 146, de la Constitución Política.

ACUERDAN:

Artículo 1°—Integrar en la comitiva oficial que acompañará al señor Presidente de la República Abel Pacheco de la Espriella a Managua Nicaragua, para participar en la XXI reunión ordinaria de Presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Primer Ministro de Belice, que saldrá el día 17 de junio y regresará el día 22 de junio del presente año, a las siguientes personas: Señora Leila Rodríguez Stahl; Primera Dama de la República, Jorge Arce Lara, Director de Protocolo y Asesor del señor Presidente de la República, Alfredo Bermúdez Zúñiga, Escolta del Presidente; Humberto Soto González, Escolta del Presidente; Slahuko Jawnyj Sánchez, Escolta del Presidente y Gustavo León Jiménez, Funcionario de la Dirección de Protocolo.

Artículo 2°—Rige a partir del 17 al 22 de junio del 2002.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la Presidencia, Rina Contreras López.—1 vez.—(Solicitud N° 118-02).—C-4880.—(47377).